

Antes y Después del 12 y 13 de febrero

Por: Alberto Bonadona Cossío

Los fatídicos acontecimientos del 12 y 13 de febrero marcaron el séptimo mes de la presente administración de gobierno y, posiblemente, sea el sello indeleble que la caracterice históricamente. Iniciada con los bríos de una campaña electoral asentada en la lucha contra la corrupción y la reactivación de la economía, enfrentó su primer gran desafío al momento de establecer la coalición para lograr la mayoría congresal para elegir al Presidente y Vicepresidente. No aparecen en el horizonte serias amenazas antidemocráticas que impidan se concluya el periodo del mandato presidencial, sin embargo, el desafío más grande se encuentra en el terreno económico. Hasta ahora las ideas para confrontarlo no se destacan por su brillantez ni originalidad que no sea la que sugiere el FMI.



Los meses de junio y julio, se distinguieron por la incertidumbre que el inusitado ascenso del MAS causó en los sectores medios y altos de la sociedad boliviana. Si la crisis económica ahuyentó del país cerca de 1.000 millones de dólares desde 1998, los meses de incertidumbre previos a la definición congresal por un gobierno liderizado por el MNR, quitaron a la banca más de 600 millones y aparentemente, si la indefinición continuaba, este drenaje se hubiese acrecentado.

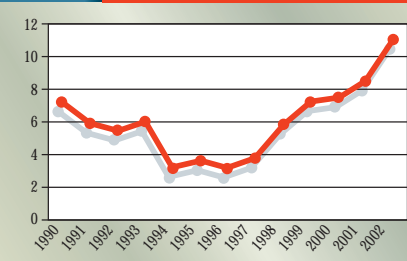
El clima político de esos meses simplemente agravó aún más las condiciones económicas

prevalecientes desde tiempo atrás. Así, desde donde se mire, la presente administración no se inició con los mejores auspicios. Con tasas de desempleo superiores al 11% estimada para 2002 (Cuadro 1) (de acuerdo al CEDLA supera el 20%), una tendencia al deterioro en la tasa de crecimiento del PIB desde 1990 (Cuadro 2) que entre 1999 y 2001 no cubre el crecimiento de la población y, por tanto, se genera un deterioro real en el ingreso por persona, se esperaba grandes y acertadas medidas para remontar estas adversas circunstancias. La estimación de un crecimiento del 3% del PIB para este año se muestra más

como un deseo que una efectiva posibilidad.

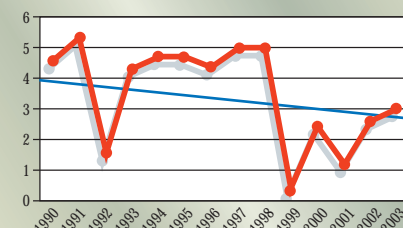
Si bien se puede hablar de una estabilidad macroeconómica al observar una caída permanente de los precios que tiende a una inflación próxima a cero, representada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (Cuadro 3), en los últimos cinco años es más un resultado de la crisis económica que de diseño de políticas económicas premeditadas. La actual deflación se torna, de esta manera, en un indicador de cuán mal está la economía y lo poco que se ha hecho (o se puede hacer) en el campo de políticas económicas independientes.

Cuadro 1 Tasa de desempleo abierto(%)*

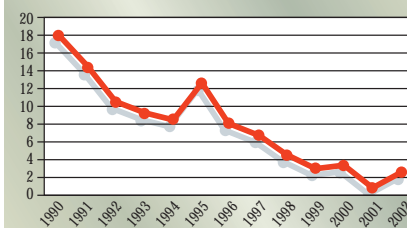


*Entre el 90-95 corresponde a ciudades capitales, en adelante es urbana

Cuadro 2 PIB Tasa de Crecimiento (Bs de 1990 (%))



Cuadro 3 IPC: Variación Acumulada Anual (%)





progresividad (a mayor ingreso percibido mayor es el impuesto que se paga). Sin embargo, la indiscriminada escala porcentual afectaba con excesiva dureza a los ingresos más bajos. Aunque permitía una disminución de dos salarios mínimos al salario bruto antes de aplicar una tasa universalizada del RC-IVA del 12,5%, una persona, por ejemplo, con un total ganado de 3.000 Bolivianos se veía afectada considerablemente con un impuesto próximo a los 300 Bolivianos. Monto demasiado significativo para un salario típico de la gran masa de asalariados que difícilmente pueden evadir porque literalmente son “prisioneros de una planilla”. Circunstancia nada comparable con la de empresarios (formales o informales), o simplemente, convertir grandes sumas en deudas eternas al Estado que se manipulan políticamente para no pagarlas, o profesionales independientes con ingresos que pueden ocultar o hacer “escapar” de las planillas.

La eliminación del descuento del RC-IVA, permitido con la presentación de facturas cuya adquisición se ha convertido en un mercado semisubterráneo, golpeaba de forma enérgica a una clase media empobrecida. La medida, como muchas otras se planteó sin mayores explicaciones públicas y con poca claridad. La medida, en realidad, tocaba la bolsa de ciudadanos aparentemente indefensos. Por cierto, se comprobó que la bolsa personal es una parte sensible y que, llegado el momento, los sectores medios pobres o casi pobres tienen sus propios parapetos y reacciones violentas, no obstante caóticas.

El “Plan Bolivia”: un hábito de confianza

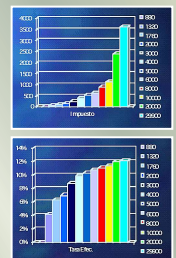
Formada la coalición, basada principalmente en el MNR y el MIR, nuevos bríos se generaron al anunciarse el “Plan Bolivia”; una expresión de coincidencias programáticas, con diferencias menores de acentuaciones originadas en los planteamientos electorales de ambos partidos pero que, esencialmente, mostraron más concordancias que disidencias. El Plan permitió al nuevo gobierno hablar de un financiamiento externo equivalente a un promedio de al menos 700 millones de dólares por año. Cantidades suficientes como para sacar a la economía boliviana de la crisis y establecer las bases de un potencial desarrollo futuro. Se habló de incrementar la inversión pública en 25% para impulsar obras con empleos en todos los municipios y departamentos del país y de tocar lo intocable: Una reducción del gasto corriente del Estado en 10% (10% en sueldos y salarios, 10% en bienes y servicios y 10% en gastos reservados).

Todo se pintaba coherentemente posible y permitió elevar la confianza en importantes sectores de la población. Parecía que la crisis finalmente tocaba fondo, y existía la decisión, así como los recursos, para cambiar el curso crítico de los últimos años. No obstante, el año 2003 llegó con la penosa constatación que las medidas económicas necesarias para reactivar la economía que deberían haberse tomado desde agosto no se plasmaban en nada concreto. Las promesas de los recursos externos, necesariamente toman su propio tiempo en tramitarse y el FMI, sin percatarse de las consecuencias nocivas de sus exigencias, insistía, como hasta ahora lo hace, en una disminución del déficit fiscal y en mayores niveles de su financiamiento vía aumento de impuestos. Mensaje que fue tomado por el Gobierno como la forma de empujar un impuesto al ingreso en apariencia progresivo (con mayor impacto en los ingresos altos).

En consecuencia, se introdujo al presupuesto una escala impositiva del 12,5% aplicada a todos los contribuyentes por igual (Cuadro 4), lo que, en términos absolutos, permitía una aparente

Cuadro 4 Progresividad en el RC-IVA

880	0	0%
1320	55	4,2%
1760	110	6,3%
2000	140	7,0%
3000	265	8,8%
4000	390	9,8%
5000	515	10,3%
6000	640	10,7%
8000	890	11,1%
10000	1140	11,4%
20000	2390	12,0%
29900	3628	12,1%

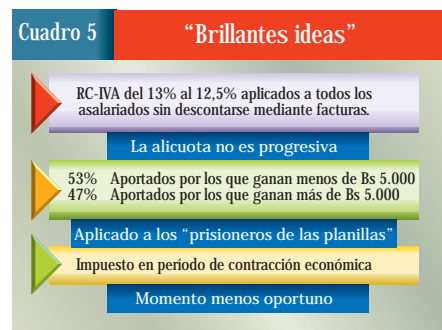


Apreciaciones erróneas y palacios atacados

En palabras de un representante internacional, que prefiere no ser identificado, el 11 de febrero, el Presidente de la República mostraba la suficiente confianza en que los tributos diseñados serían aceptados por la población, con pocas muestras de descontento fácilmente controlados o reprimidos por la policía, sin mayor costo

político para la coalición. Ciertamente, una apreciación que no tomó en cuenta el oportunismo de algunos sectores descontentos de la policía que esperaban la ocasión como la que el Gobierno les brindaba para iniciar un motín con sus propios reclamos. Este logró el apoyo del conjunto de la institución policial y, al abandonar sus deberes, causó la mayor inseguridad ciudadana vivida desde los acostumbrados golpes de estado del pasado, especialmente en los centros urbanos de La Paz y Santa Cruz.

El proyecto del presupuesto, incluyendo el ya denominado impuestazo, generó una reacción de los sectores más empobrecidos de magnitudes insospechadas. El vandalismo naturalmente emergió en tales circunstancias. Los ataques al Palacio de Gobierno e incendios de edificios públicos simbolizan la desesperación y el descontento generalizado. Los destrozos causados en determinadas oficinas parecieron obra premeditada y dirigida por fuerzas siniestras. Lo cierto es que expresaron la frustración a la falta de respuestas a problemas cotidianos que incluso afectan a los sectores medios y acomodados de la población. Las jornadas del 12 y 13 de febrero obligaron al Gobierno a poner freno de mano en sus expectativas de aprobación de la nueva escala tributaria y no se ha vuelto a hablar de ello ni siquiera para aplicarla a los sectores de mayores ingresos con capacidad de pago (como de evasión). Por parte del gobierno se ratificó que la alternativa al impuestazo era el gasolinazo. Por su gran impacto en los ingresos más bajos, semejante alternativa no sirvió para frenar la violenta reacción.



Era inevitable que la oposición trate de sacar ventaja de esas circunstancias, pero es una exageración considerar al espontaneísmo que marcó el 12 y 13 de febrero como una acción política planificada que incluía el magnicidio. Si en algo confirma, por su superficialidad y aparente objetividad, el informe de la OEA, es la espontaneidad del movimiento. Movimiento que, con inusitada violencia, convirtió a la

insubordinada policía de fuerza represora en excepcional y heroica abanderada del repudio al incremento de impuestos e ineficacia gubernamental.



¿Quién controla la inflación en Bolivia? Esta se controla porque el que todavía produce algo vende más barato con la esperanza de generarse algún ingreso, o por quien consume con dinero prestado o se ha dedicado al asalto en las calles para poder subsistir.

Cargas tributarias y el inefable FMI

Las condiciones que se siguieron no son las más auspiciosas para un Gobierno que se debilitó al sólo presentar un presupuesto con mayores cargas tributarias y menos aún al constatare la tardanza de la ayuda externa. Casualmente los funcionarios del FMI fueron testigos presenciales de los acontecimientos del 12 y 13 de febrero y, se pudo asumir, que en algo sirvió su oportuna presencia para las posteriores negociaciones que hasta hoy continúan con ese organismo. Como señala Stiglitz en su libro "El Malestar de la Economía", la burocracia del Fondo, tiene como marca de

fábrica un desconocimiento de la realidad y de la pobreza que caracteriza a países como Bolivia. Empero, después de esas fechas, su exigencia se ha vuelto menos intransigente y ha aceptado que la reducción del déficit fiscal ocasionado por el pago de las pensiones se realice gradualmente.

Aunque, en esencia, su miopía e insensatez se confirman con las declaraciones de Anne Krueger al concluir las últimas sesiones de negociación con el gobierno: "A pesar de una difícil coyuntura política y social, la situación económica sigue bajo control, ... los depósitos bancarios están casi al mismo nivel que a finales de 2002 y la inflación permanece contenida" (Véase "La Prensa" 08/07/03). Especialmente después del 12 y 13 de febrero, que inmovilizó al gobierno y espantó a la ciudadanía, se vive en Bolivia en condiciones vidriosas. La aserción de que la situación económica sigue bajo control, es miopía, desatino o simple ignorancia. Si algo no está bajo control en Bolivia es la economía, al menos bajo el control de las autoridades económicas que no mejoran el desempleo, la quiebra de las empresas, el sistema bancario que continúa encogiéndose (según palabras que utiliza el informe mensual del Banco Central). Tal vez lo que quiso decir la distinguida funcionaria fue que el control de la economía está en manos del enemigo: la deflación, el desempleo, el hambre endémica. Como ella no ve ni siente lo que vive la sociedad boliviana, sino exclusivamente aquello que le puede perjudicar en su carrera individual, debe sentirse complacida con sus recomendaciones de "reestructuración" para alcanzar "el crecimiento económico sostenido".

¿Quién controla la inflación en Bolivia? Esta se controla porque el que todavía produce algo vende más barato con la esperanza de generarse algún ingreso, o por quien consume con dinero prestado o se ha dedicado al asalto en las calles para poder subsistir. Ciertamente todas son condiciones que pueden mantener baja la inflación de por vida y con toda certeza hasta la muerte de la mismísima economía nacional.

Lo peor de aseveraciones desatinadas de la Sra. Krugman, es que los gobernantes las repiten como sinónimos de aprobación de sus magníficas políticas económicas en vez de exigirle se abstenga de declarar una sola palabra. Se pierde la capacidad de razonamiento propio y se hacen juegos demagógicos de reducción de sueldos de la burocracia estatal, como si esto solucionase los problemas de la población. Y así se sigue bajo el control del encogimiento económico total y las inteligencias que no pueden separarse de las "sugerencias" del FMI ■